



Comunicado 31 de octubre de 2018

Comunicado de la señora Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, licenciada Raquel Caballero de Guevara, sobre la situación de las personas salvadoreñas que emigran de forma masiva en tránsito por Guatemala y México rumbo a Estados Unidos

Las diferentes convocatorias realizadas a través de las redes sociales, para conformar grupos de personas con la intención de emigrar a Estados Unidos de América, ya ha sido efectiva con la salida de salvadoreñas y salvadoreños que el pasado 28 de octubre partieron desde el monumento el Divino Salvador del Mundo en San Salvador. De acuerdo a datos proporcionados a los medios de comunicación, por el la Viceministra de Salvadoreños en Exterior, se contabilizó la salida de aproximadamente 500 personas por la frontera la Hachadura. Por su parte la Dirección de Migración y Extranjería confirmó la salida de unas 534 personas. De estos, 37 eran Niñas, Niños y Adolescentes con documentos y solo 64 personas no pasaron la frontera por no portar sus documentos según los requisitos correspondientes.

Ante la intención pública de emigrar en grupos, el gobierno de El Salvador y las diferentes instituciones como El Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia se pronunciaron exhortando al pueblo salvadoreño a no arriesgar sus vidas emigrando de manera irregular y no exponiendo en mayores condiciones de vulnerabilidad a niñas, niños y adolescentes. En este mismo sentido, referentes institucionales del Consejo Nacional para la Protección y Desarrollo de la Persona Migrante y su Familia, posterior a la salida del grupo de migrantes manifiestan ser respetuosos de la decisión de emigrar, pero instaron a realizarlo de manera segura.

En el contexto antes mencionado y como parte de mi mandato constitucional de velar por el respeto y garantía de los derechos humanos, de asistir a presuntas víctimas y de supervisar la actuación de la administración pública frente a las personas, sobre todo en situación de vulnerabilidad como lo es la migración irregular, personal de esta Procuraduría verificó dentro del territorio nacional la congregación, tránsito y salida del país de este grupo de salvadoreñas y salvadoreños y se identificaron los siguientes hallazgos:

a) El grupo está conformado por personas a nivel nacional, varias personas del interior del país que partieron desde San Miguel, Chalatenango, Cuscatlán, etc. incluso pernoctaron en los alrededores del punto donde habían sido convocados. Entre el grupo se encuentran mujeres, hombres, niños, niñas, adolescente, personas adultas mayores y en su mayoría el grupo está conformado por jóvenes.

b) Dentro del grupo se identificaron múltiples causas para emprender el viaje, la falta de credibilidad en el funcionamiento efectivo de las instituciones públicas, es una de las motivaciones que expresaron, sobre todo ante la situación de inseguridad (que también fue un factor reiterado por la mayoría de jóvenes). Asimismo, se identificaron grupos familiares con necesidad de protección que por hechos de violencia de grupos de pandillas y ante la falta de respuesta institucional, decidieron migrar para salvaguardar su vida. Además, expusieron razones de condiciones de pobreza, falta de oportunidades de desarrollo personal y familiar, desempleo y finalmente reunificación familiar.



c) Se evidenció desconocimiento de las personas entrevistadas sobre las rutas que seguirían, los requisitos legales para la salida de niños, niñas y adolescentes y riesgos del viaje, además de no identificar a las personas que los habían convocado por redes sociales.

d) Hubo presencia de instituciones públicas como CONMIGRANTES, CONNA e ISDEMU, en el lugar de partida y en el recorrido para facilitar información sobre los riesgos de viaje, requisitos legales para la salida de niños, niñas y adolescentes, etc. presencia de la Policía Nacional Civil que brindó seguridad durante todo el recorrido. Además del apoyo de organismos internacionales como OIM y otras organizaciones de la Sociedad Civil.

Ante esta grave situación como Defensora del pueblo he informado sobre los hechos descritos a mis homólogos en Guatemala y México para que verifiquen las condiciones de estas personas migrantes y les proporcionen asistencia, en caso de ser necesario y el acompañamiento correspondiente para prevenir afectaciones a sus derechos humanos en el tránsito, por medio del protocolo de la Federación Iberoamericana de Ombudsmen, institución de la cual coordino la Red de Migrantes y Trata de Personas para Centroamérica.

No obstante los esfuerzos de las instituciones públicas y otras organizaciones, para que la población viaje informada, la migración grupal de personas, en condiciones de riesgo, es un hecho histórico sin precedentes en el país, motivado por las afectaciones a sus derechos a la seguridad, integridad, a la vida por amenazas de grupos de pandillas, además de derechos económicos, sociales, culturales y la falta del cumplimiento del deber de garantía del Estado salvadoreño de crear credibilidad en las instituciones públicas encargadas de perseguir el delito, lo cual no les permite la consecución de su proyecto de vida en el país.

En consecuencia, sobre la base de mi mandato constitucional y legal, hago un vehemente llamado al señor Presidente de la República, a que aborde esta grave problemática de manera urgente a nivel regional con los gobiernos de Honduras, Guatemala, México y Estados Unidos, estableciendo estrategias de protección, que comprenda: la asistencia humanitaria, legal y con enfoque de derechos humanos y no solamente de control migratorio y seguridad nacional, que criminalizan la migración indocumentada. Además, de la identificación de grupos con necesidades de protección internacional u otras medidas de protección complementarias, debido a que los estados tienen la obligación de garantizar a las personas migrantes, los principios de unidad familiar, el derecho a la no devolución (non-refoulement) y la prohibición de expulsiones colectivas.





A la misma autoridad, realice una revisión de la política migratoria nacional en conjunto con las autoridades competentes, como el Ministerio de Relaciones Exteriores y demás instituciones que conforman el CONMIGRANTES, para hacer énfasis en las políticas de retención de personas para evitar su migración, es decir la implementación de lineamientos concretos y sustentables para la generación de condiciones y oportunidades para el desarrollo personal, laboral y económico de las personas, garantizando su seguridad personal, con atención diferenciada, debido a que ejecutar una política migratoria integral exige considerar y articular cada una de las variables involucradas (educación, salud, seguridad del Estado, seguridad social, empleo, patrones culturales, crecimiento de la población, etc.), lo cual significa tener presente las causas y características de la migración de las personas salvadoreñas.

Además, es impostergable el reconocimiento del Órgano Ejecutivo y Legislativo salvadoreño, del desplazamiento forzado por violencia, para generar las condiciones legales y las consecuentes políticas que comprendan programas más integrales de atención a víctimas por desplazamiento, que generan alternativas a las personas para no emigrar por esta causa, se garantice sus derechos a la seguridad e integridad y se genere confianza en la efectividad de las instituciones públicas competentes para la denuncia e investigación de los hechos que causan el desplazamiento. Asimismo, de dar cumplimiento de forma prioritaria a la Sentencia 144-2017 de la Corte Suprema de Justicia, cuyo mandato establece el reconocimiento de las víctimas de desplazamiento y el establecimiento de la normativa correspondiente.

Finalmente, insto a la Viceministra de Salvadoreños en el Exterior a que se garantice plenamente el derecho a la protección consular de las personas salvadoreñas migrantes y reconozco sus esfuerzos por mantener la presencia necesaria en las fronteras correspondientes o territorios de tránsito de dicha población en Guatemala y México; sin embargo es importante que se brinde una información clara precisa y orientadora a las personas migrantes, para que conozcan plenamente los procedimientos a los cuales se someten en dichos países, como parte del derecho a la protección consular que comprende la asistencia legal.

Reitero mi compromiso de dar seguimiento a la verificación de la migración grupal que se ha generado, tanto de las personas que han partido como las que se prevee que migrarán en fechas próximas, activando a las instancias que correspondan y supervisando la actuación de las autoridades nacionales como parte de mi mandato constitucional y legal.

San Salvador, 31 de octubre del 2018.

